

El verdadero rostro de la profesionalización

Alberto Estefanía

Con el cambio de Gobierno en la primavera de 1996, el nuevo ejecutivo propone acabar en el 2003 con el servicio militar obligatorio y con la prestación social sustitutoria renovando un ejército mixto con conscripción por uno profesional de 180.000 efectivos. Tras conocer la noticia, numerosos jóvenes -y personas allegadas a ellos- se regocijaron enormemente al verse liberados de su obligación legal con la defensa de España.

Pero este hecho no es suficiente para hablar de una amplia aceptación del proceso de profesionalización en la sociedad española. Otras personas que ubican el punto de análisis de lo acontecido más allá de la esfera del beneficio personal, han mostrado su oposición al proyecto y gran parte del tejido asociativo no deportivo, así como algunas fuerzas políticas, han propuesto un ejército menor para recortar el gasto militar. A pesar de todo ello, el Gobierno intenta transmitir, desoyendo las voces críticas, una imagen optimista del proceso iniciado. Con ella pretende silenciar una serie de hechos que constituyen el verdadero rostro de la profesionalización.

El primer hecho que, aunque evidente, el Gobierno quiere obviar, es el desafecto de la sociedad a lo militar. Pese a los esfuerzos del Ministerio de Defensa por ocultarlo, un somero análisis del proceso de profesionalización sirve para constatar lo innegable. Por un lado, hay que tener en cuenta el perfil del soldado profesional. Según el propio Ministerio de Defensa (Revista Española de Defensa, marzo-97), el máximo nivel de estudios alcanzado por el 61,8% de los/as soldados profesionales es el de graduado escolar y FP-1 y sólo el 10,5% llega al de COU. Aparte del bajo nivel de estudios en comparación con la media estatal, estos jóvenes -varones en más de un 90% de los casos- provienen de familias de clase baja o media-baja ubicadas en provincias con alta densidad poblacional o con una fuerte implantación militar. El que un alto porcentaje de estas personas se vea abocado a incorporarse a la vida castrense por su situación socio-laboral, ha generado un nuevo concepto en círculos académicos: la guetización de la tropa.

Por otro lado, tras un estudio cuantitativo, resulta sorprendente comprobar que, en total contradicción con las predicciones gubernamentales, el contingente no aumenta como se preveía o incluso como en ocasiones se ha dicho que ha ocurrido. El crecimiento real -distinto de las plazas cubiertas dado que hay soldados que abandonan las Fuerzas Armadas- ha sido, por ejemplo en 1997, de 1.802 soldados frente a las 12.500 plazas convocadas. En el segundo reemplazo del presente año, tras la macrocampaña publicitaria para incrementar el reclutamiento de soldados profesionales, los/as aspirantes han disminuido aproximadamente en un 15 % con relación a la convocatoria anterior.

No es la pretensión de estas líneas hacer un análisis exhaustivo del reclutamiento de la tropa profesional, pero, en cualquier caso, la reacción del Gobierno ante estos eventos en un intento de tergiversarlos, no hace sino corroborar el divorcio existente entre la sociedad y el Ejército. Una desavenencia que el Ministerio de Defensa trata de resolver desoyendo el sentir popular desde un talante castrense de imposición antidemocrática. De esta forma y para camuflar este desafecto que refleja la falta de vocación militar, se han destinado 1.650 millones a la mayor campaña de publicidad llevada a cabo nunca por el Ministerio de Defensa que, a la luz de las encuestas realizadas a los/as militares profesionales incorporados/as tras la primera fase de la misma, ha sido un estrepitoso fracaso.

Asimismo, y con la misma intención, se ha disminuido en 10.000 el número de soldados previstos -y probablemente se volverá a hacer-; se han reducido los requisitos para acceder a profesional con un nuevo contrato anual que sólo exige el certificado de escolaridad; se han aumentado las ventajas sociales de los/as futuros/as soldados; se ha introducido la Formación del Espíritu Militar en las escuelas; se ha propuesto instaurar un sistema de alistamiento permanente que sustituya al anterior de tres convocatorias anuales y, con la nueva Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, se retrasa el paso a la reserva.

Otra prueba evidente de esta sensibilidad social frente al militarismo que posee gran calado sociológico, es el crecimiento de la objeción de conciencia y de la insumisión. Ella constituye específicamente el tercer hecho que forma la cara intencionadamente encubierta del proceso de profesionalización.

En segundo lugar, la profesionalización supone un aumento del gasto militar. Recientemente, Adolfo Me-néndez, subsecretario de Defensa, ha declarado que: "Los gastos en defensa son el precio de la libertad". En lo que va de año, el presupuesto del Ministerio de Defensa ha pasado de 869.992 millones en 1997 a 1,2 billones, un aumento mayor que lo que se pretende ahorrar con el polémico medicamentazo. Pero el gasto militar es superior. Ciertas partidas (créditos del Ministerio de Industria a fábricas de armas, cuota de la OTAN, fondos destinados a las clases pasivas de carácter militar...) se encuentran tácitamente distribuidas en otros ministerios y rara vez se tienen presentes cuando el Titular de Defensa se queja de su reducido presupuesto. Actualmente, teniendo esto en cuenta, el gasto militar presupuestado para 1998 asciende a 2,08 billones de pesetas.

Sin pretender regocijarnos por lo evidente de la tesis planteada, resulta lícito señalar que dicha cantidad equivale al presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura, al de Trabajo y Asuntos Sociales y al de Agricultura, Pesca y Alimentación juntos. Es lógico que tan elevado gasto militar y el aumento del mismo supongan un recorte en otros gastos, generalmente los sociales, que difícilmente va a agrandar nuestra libertad. Este hecho consolida la oposición de numerosos colectivos a lo militar.

Por todo ello, el Estado trata de dar una imagen útil del Ejército que justifique tal sangría a l@s contribuyentes y la propia existencia de aquél. Así, se habla de "misiones de paz" y de "ejército humanitario". La guerra en la ex-Yugoslavia, por citar el caso más conocido, ha sido instrumentalizada en pos de mejorar la imagen del Ejército. Lo que no esperaba el Ministerio

de Defensa es que fuera el propio Radovan Karadjic, reo de genocidio en La Haya, el que elogiara la labor española declarando: “Tenemos la mejor opinión del contingente español en Bosnia y de la diplomacia española. España es la más imparcial”. La misma limosna interesada se prestará en Albania, Macedonia o Líbano, si intervienen tropas españolas.

Aunque no es el momento de recoger el sinfín de violaciones de los derechos humanos protagonizadas por los cascos azules -algunas de ellas denunciadas recientemente, como la prostitución infantil en cuarteles de la OTAN en Sarajevo-, tampoco podemos obviarlas ya que desmaquillan el papel “humanitario” y “pacificador” de los ejércitos. Contrariamente a lo pretendido, los acontecimientos internacionales dictan que la principal misión de los ejércitos es mantener el injusto orden mundial en favor de los intereses de los países enriquecidos y de los dictadores afincados en el Sur.

El tercer hecho, no por ello menos relevante socialmente, es el elevado número de objetores y de insumisos, el más alto del mundo. El porcentaje de los primeros en relación con el contingente militar fue el pasado año del 73.7%. Por otro lado, aunque es casi imposible encontrar información oficial veraz del número real de insumisos, los datos sociológicos más fiables apuntan a que en 1996 eran unos 14.000; a éstos hay que añadir el creciente número de los que se han declarado desde entonces.

No se puede hablar de insumisión sin tener en cuenta el gran apoyo recibido por los actores de este fenómeno colectivo. Por ejemplo, las universidades del País Vasco y de Zaragoza, al igual que numerosos ayuntamientos, se han declarado insumisas, negándose a aplicar las inhabilitaciones impuestas por el Código Penal del 95. También numerosos intelectuales tan relevantes en el panorama español como José Luis López Aranguren, José María Mardones, Javier Sádaba o Francisco Fernández Buey, han declarado públicamente su apoyo a esta forma de desobediencia civil.

El Gobierno, por su parte, ha tratado de reprimir el antimilitarismo de diferentes maneras: encarcelando, inhabilitando y, ahora, hablando de indultos. En realidad los indultos y la mal llamada “despenalización de la insumisión” -se mantienen las penas de muerte civil- sólo pretenden desintegrar la disidencia antimilitarista y allanar el camino hacia la profesionalización. Sin embargo, el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), lejos de desmovilizarse ante el anunciado fin de la mili -provocado básicamente por él-, ha hecho su apuesta más fuerte: la Insumisión en los Cuarteles, es decir, la desertión. Y es que los colectivos antimilitaristas nunca han perseguido el fin del servicio militar obligatorio o la despenalización de la insumisión en sí mismos, sino que siempre han apostado por mantener despierta la alternativa al sistema por la que trabajan desde un principio: un mundo desmilitarizado y en paz. Así, de igual forma que hace unos años se plantearon la supresión del servicio militar para caminar hacia la anhelada desmilitarización social, hoy la abolición del ejército se ha convertido en la próxima meta a alcanzar.

Ahora, una vez desenmascarada la profesionalización, es el momento de preguntarse por su viabilidad. La fuerza del antimilitarismo en la sociedad reflejada en la insumisión y en la insumisión en los cuarteles, en la objeción fiscal, en la no-colaboración con las inhabilitaciones, en el descontento social ante los gastos militares en detrimento de los sociales y, por otro lado, la falta de vocaciones militares y la consecuente guetización de la tropa, etc. apuntan a ese divorcio irreconciliable del que venimos hablando. Sobre esta base es imposible el éxito real de la profesionalización. Mientras, el Gobierno sigue vendiendo la necesidad de unas Fuerzas Armadas modernas y caras, los/as posibles soldados prefieren que nos “defiendan” otros/as, la sociedad no quiere incrementar los gastos militares y el movimiento antimilitarista -fiel a su conciencia- sigue empujando la Historia, como ya señaló Albert Einstein, hacia un futuro sin guerras y libre de ejércitos con el que todas las personas que deseamos un mundo justo, hemos soñado.

DICCIONARIO PARA TIEMPOS DE RECONVERSION MILITAR

Este breve glosario de conceptos para detectar y traducir palabras que aparecerán frecuentemente en boca de políticos y militares.

Crisis, control de la: Las crisis se crean, se desarrollan, reproducen y controlan por un número limitado de países en otros países para mantener sus florecientes industrias armamentísticas.

Intervenciones humanitarias: Sirven para demostrar que los ejércitos son necesarios. Dícese de viajes pagados para señores con casco azul. Cuando salen se declaran novios de la muerte, cuando llegan se interponen y ayudan a cruzar la calle a las niñas (especialmente si hay cámaras).

Modernización: Muy empleado por los militares quedesean adquirir nuevos artilugios, más sofisticados, pero que sirven para lo mismo.

Paz, mantenimiento o imposición de la: Concepto inventado por los romanos (Pax Romana). Consiste en dominar un territorio mediante el movimiento de las legiones del imperio. En la actualidad se ha reeditado por la ONU.

Profesionalización: Eufemismo sinónimo de Abolición del S. M. Obligatorio. Proceso por el que pretenden dignificar y pagar a los que se entrenan para matar.

Seguridad colectiva: Término empleado para justificar la intervención militar en el exterior. El adjetivo colectivo se refiere a las diferentes instituciones financieras internacionales.

Coordinadora Asturiana Pola Insumisión

revista Ekintza Zuzena nº24

fuelle http://www.nodo50.org/ekintza/article.php3?id_article=182